12416 ORDEN de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 28/78, promovido por don Jaime Quintana Nicoláu y doña María Delfina Carmen Hernández Martín.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 28/78, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria por don Jaime Quintana Nicoláu y doña María Delfina Carmen Hernández Martín, contra resolución de este Ministerio de 1 de marzo de 1977, se ha dictado, con fecha 23 de enero de 1980, sentencia por el Tribunal Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso de apelación interpuesto por el señor Abogado del Estado, contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, por la que se anuló resolución de la Delegación de Industria de Las Palmas, fechada en uno de marzo de mil novecientos setenta y siete, a que estas actuaciones se contraen, debemos, con revocación de la mencionada sentencia, declarar y declaramos la validez de la mencionada resolución administrativa como ajustada a derecho, con la consecuente validez y eficacia, en cuanto a este recurso concierne, del acta previa para la urgente ocupación de bienes gravados por la servidumbre de paso de energía eléctrica entre la estación transformadora de "Los Castillos" y "Lomo del Palmar", en el municipio de Teror (Las Palmas), extendida en veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y siete. Todo ello sin hacer especial imposición de costas en ninguna de ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, José Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

12417 ORDEN de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 52.746, promovido por don Luis de la Peña Costa.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 52.746, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Oviedo por don Luis de la Peña Costa, contra resolución de este Ministerio de 28 de octubre de 1977, se ha dictado, con fecha 30 de enero de 1980, sentencia por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Revocando la sentencia de siete de abril de mil novecientos setenta y nueve de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, a la que se refiere el primer resultando de esta sentencia, declarando que no es conforme a derecho la inadmisibilidad del recurso, y entrando a conocer del fondo de éste, desestimamos la pretensión de don Luis de la Peña y Costa de que se declare la nulidad de pleno derecho del expediente expropiatorio, y cuantas actuaciones haya realizado la Jefatura de Oviedo en relación con los terrenos del recurrente en la provincia de León y, particularmente, del acta de ocupación, y se ordene la inmediata desocupación de las fincas del recurrente y se declare que estas fincas no están en absoluto afectadas por la expropiación para la construcción de un camino minero por la "S. A. Hullas del Coto Cortés" y, en su caso, se tenga en cuenta todos los perjuicios que se deriven de la expropiación para la explotación ganadera del recurrente, declarando la conformidad a derecho de los actos impugnados; sin hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y "Colección Legislativa", definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, José Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

12418 ORDEN de 6 de mayo de 1980 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso-administrativo número 33.327, promovido por «Ibérica de Talcos, S. A.».

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 33.327, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Valladolid por «Ibérica de Talcos, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 15 de febrero de 1977, se ha dictado, con fecha 18 de octubre de 1979, sentencia por el Tribunal Supremo, en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos de desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación, interpuesto por "Ibérica de Talcos, S. A.", contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid, de fecha quince de febrero de mil novecientos setenta y siete, la cual confirmamos íntegramente; todo ello sin la expresa condena en costas de esta apelación.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 6 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, José Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

12419 ORDEN de 8 de mayo de 1980 por la que se rectifica la de 6 de julio de 1979, al aceptarse la renuncia de «Talleres Toral, S. A.», a los beneficios que le concedió dicha Orden por la realización de instalaciones industriales en el polígono de preferente localización industrial «Cerro de San Cristóbal» de Valladolid (expediente VA-36).

Ilmo. Sr.: La Orden de este Ministerio de 6 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre), de aceptación de solicitudes para acogerse a los beneficios aplicables a las Empresas que proyecten instalaciones industriales en los polígonos de preferente localización industrial, aceptó, entre otras, la solicitud de «Talleres Toral, S. A.», para la realización de un taller de calderería y transformados metálicos para automoción en el polígono «Cerro de San Cristóbal», de Valladolid (expediente VA-36), concediéndole los beneficios correspondientes.

Habiendo presentado la citada Empresa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 96.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 18.1 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, que desarrolló la Ley de Industrias de interés preferente, la renuncia a los beneficios obtenidos, procede en base a lo establecido en las citadas disposiciones aceptar de plano dicha renuncia, con los efectos que se indican en el último de dichos artículos.

Por tanto, este Ministerio, a propuesta de la Secretaría General Técnica, ha resuelto:

Primero.—Aceptar de plano, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la renuncia presentada por «Talleres Toral, S. A.», a los beneficios que le concedió la Orden de este Departamento de 6 de julio de 1979; por la realización en el polígono de preferente localización industrial «Cerro de San Cristóbal», de Valladolid, de una industria de calderería y transformados metálicos para automoción (expediente VA-36).

Segundo.—Modificar por tanto la citada Orden de 6 de julio de 1979, en el sentido de que quede excluida del anexo de la misma la concesión a la Empresa «Talleres Toral, S. A.», de los beneficios que en dicha Orden constan.

Tercero.—Reconocer la efectividad a esta renuncia, de acuerdo con el artículo 18.1 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, desde la fecha de su presentación, quedando liberado el promotor, en base al apartado 2 del precepto citado, del cumplimiento de las obligaciones a que estuviese sometido.

Cuarto.—«Talleres Toral, S. A.», está obligada a devolver los beneficios o subvenciones ya disfrutadas, según dispone el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, de la presente Orden deberá darse cuenta al Ministerio de Hacienda, a los efectos que en dicho precepto se establecen.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, José Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.